

069/2025

I

La Orden objeto del presente informe tiene por finalidad regular el sistema de legalización electrónica de determinados libros sociales y contables de las sociedades cooperativas, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y en el artículo 27 del Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas, aprobado por el Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero.

La norma se inserta en el proceso de adaptación de los procedimientos registrales a la administración electrónica, estableciendo un procedimiento íntegramente electrónico para la presentación, legalización y devolución de los libros obligatorios de las sociedades cooperativas, con pleno respeto a las garantías jurídicas exigidas por el ordenamiento jurídico.

La Orden se estructura en seis artículos, que regulan, respectivamente, el objeto de la norma, la forma y el plazo de presentación de los libros, el régimen de legalización y el principio de tracto sucesivo, la rectificación de libros ya legalizados, la forma de legalización y, finalmente, las garantías de seguridad e integridad de los archivos sometidos a legalización.

El artículo 1 delimita con precisión el objeto de la Orden, circunscribiéndolo a la regulación del sistema de legalización electrónica de los libros enumerados en el propio precepto, todos ellos expresamente previstos en el **artículo 60 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas**, así como de aquellos otros que vengan exigidos por disposiciones legales.

El artículo 2 regula la forma y el plazo de presentación, estableciendo la obligatoriedad de la presentación electrónica de los libros a través del Sistema de Información del Registro de Cooperativas, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, y determinando los requisitos mínimos que debe reunir la solicitud de legalización.

El artículo 3 contempla el régimen de legalización de los libros y el principio de tracto sucesivo, imponiendo su legalización correlativa y ordenada, e impidiendo la legalización de un libro cuando no conste previamente legalizado el inmediatamente anterior.

El artículo 4 regula el procedimiento de rectificación de libros ya

legalizados, exigiendo la aportación de certificación acreditativa del error cometido y del archivo rectificado.

El artículo 5 establece la forma de legalización, que se realizará de manera automatizada mediante sello electrónico o firma electrónica del Encargado del Registro, sustituyendo los sistemas tradicionales de legalización manual.

Por último, el artículo 6 recoge las garantías relativas a la seguridad e integridad de los archivos sometidos a legalización, así como el régimen de conservación y borrado de los ficheros electrónicos presentados, con mantenimiento de la huella digital a efectos probatorios.

II

En primer lugar, puede analizarse el encaje jurídico de la Orden desde la perspectiva de la normativa reguladora del procedimiento administrativo y de la administración electrónica.

En dicho ámbito, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 14.2 la obligación de las personas jurídicas de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Dado que **las sociedades cooperativas ostentan la condición de personas jurídicas**, la imposición de un procedimiento de legalización exclusivamente electrónico no solo resulta conforme a Derecho, sino que constituye una consecuencia directa del citado mandato legal.

La disposición final tercera del Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, faculta expresamente a la persona titular del Ministerio competente para dictar las disposiciones de aplicación y ejecución del Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas, habilitación en la que encuentra pleno amparo la Orden proyectada. En el marco de dicho desarrollo, la regulación contenida en la Orden no introduce una carga adicional injustificada, sino que concreta y ordena el modo en que debe articularse dicha relación electrónica, aportando seguridad jurídica, previsibilidad y homogeneidad procedimental.

Desde la perspectiva material, la Orden se limita a desarrollar y concretar el régimen de legalización de libros ya previsto en normas de rango legal y reglamentario.

El artículo 60 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, impone a las cooperativas la llevanza y legalización previa de los libros sociales y contables, admitiendo expresamente la utilización de

procedimientos informáticos y estableciendo el plazo de cuatro meses desde el cierre del ejercicio para su legalización. Por su parte, el artículo 27 del Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas regula el procedimiento tradicional de legalización, basado en soportes físicos.

La Orden no altera ni desnaturaliza estas previsiones, sino que adapta el procedimiento a un entorno electrónico, manteniendo los elementos esenciales de la legalización: identificación de la sociedad, determinación de los libros legalizados, número de hojas, constancia registral y garantía de autenticidad. En este sentido, debe destacarse que la legalización electrónica persigue la misma finalidad que la legalización tradicional, reforzando incluso las garantías de integridad y trazabilidad mediante el uso de firma o sello electrónico y huella digital.

En relación con el principio de tracto sucesivo recogido en el artículo 3 de la Orden, la exigencia de legalización previa del libro inmediatamente anterior constituye una proyección lógica del principio de continuidad registral, ya presente implícitamente en la normativa cooperativa y mercantil.

Esta previsión contribuye a garantizar la coherencia temporal y la fiabilidad de los libros sociales y contables, evitando saltos o lagunas que pudieran comprometer su valor jurídico y probatorio. En este sentido, el principio de tracto sucesivo opera como una garantía tanto para la propia cooperativa como para terceros y para la Administración pública.

El régimen de rectificación de libros ya legalizados, previsto en el artículo 4, se articula de forma respetuosa con los principios de seguridad jurídica y veracidad documental. La exigencia de certificación de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia del Consejo Rector, asegura que la rectificación responda a un error real y esté debidamente acreditada por el órgano de administración de la cooperativa.

Este mecanismo evita la alteración encubierta de libros ya legalizados y preserva la confianza legítima en el contenido de estos, sin impedir, no obstante, la corrección de errores materiales o de hecho.

Especial relevancia presenta el artículo 6 de la Orden, relativo a la seguridad e integridad de los archivos sometidos a legalización, que incide especialmente en materia de protección de datos de carácter personal, en los términos que más adelante se analizan.

A la vista de todo lo expuesto, la Orden presenta un adecuado encaje en el sistema normativo vigente, desarrolla de manera coherente y

proporcionada las previsiones legales y reglamentarias en materia de legalización de libros de sociedades cooperativas y se ajusta a las exigencias derivadas de la administración electrónica, la seguridad jurídica y la protección de datos.

En consecuencia, y sin perjuicio de las observaciones que se efectúan en los apartados siguientes en materia de protección de datos personales, la Orden presenta, con carácter general, un adecuado encaje en el ordenamiento jurídico y articula de forma coherente la modernización del procedimiento de legalización de libros de las sociedades cooperativas, reforzando sus garantías y su eficiencia.

III

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a **«datos personales»** como *toda información sobre una **persona física identificada o identificable** («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.*

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que: *“Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento*

total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.”

En este contexto, aunque las sociedades cooperativas son **personas jurídicas** —no protegidas por el RGPD—, el procedimiento implica la recogida y tratamiento de diverso **tipo de datos de carácter personal** (de personas físicas, ex artículo 4 RGPD), cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias de la normativa de protección de datos. Así, entre otros, los datos personales de (i) los socios cooperativistas, incluidos en los libros de registro de socios, (ii) los de los miembros del Consejo Rector, Presidencia y Secretaría, (iii) los de los liquidadores y miembros de comités, y (iv) los de los representantes legales y personas autorizadas para la presentación de los libros.

A su vez, debe también considerarse la concurrencia del tratamiento de los denominados *datos de contacto* de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica, en los términos previstos en el artículo 19 de la LOPDGDD, cuando señala:

“Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales.

*1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el **tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica** siempre que se cumplan los siguientes requisitos:*

*a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los **datos necesarios para su localización profesional.***

*b) **Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica** en la que el afectado preste sus servicios.
(La negrita es nuestra)*

2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas.

3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias.”

En consecuencia, tanto los datos personales de los socios, miembros de los órganos de las sociedades cooperativas, liquidadores, representantes legales y personas autorizadas, como los de *las personas físicas de contacto* que prestan servicio en la persona jurídica (cuyos datos de localización son objeto de tratamiento a fin de mantener relaciones de cualquier orden con la

sociedad cooperativa en la que prestan sus servicios), se encuentran protegidos por la normativa de protección de datos.

Por tanto, el tratamiento de todos estos datos personales entrará plenamente en el ámbito de aplicación del artículo 2.1 RGPD y de los artículos 1 y 2 de la LOPDGDD.

IV

De la Orden de legalización electrónica de libros de sociedades cooperativas se desprenden, de forma clara, aunque en muchos casos implícita, una serie de funciones materiales y jurídicas del Registro de Sociedades Cooperativas como **responsable del tratamiento de datos personales**, en el sentido del artículo 4.7 del RGPD, en cuanto desarrolla, implanta y gestiona el sistema de legalización electrónica.

En este sentido, para la determinación del responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, el mencionado artículo 4.7 RGPD, señala que habrá de estarse a su definición, cuando dispone que dicha condición corresponde a *“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; (...)”*, y, en su virtud, concretar con carácter general en quién concurre dicha figura.

Pues bien, del análisis del texto sometido a informe, se extrae con la debida claridad la determinación del órgano **responsable del tratamiento**, concurriendo dicha condición en el citado Registro de Sociedades Cooperativas, al determinar dicho órgano tanto los fines como los medios del tratamiento.

En este marco, corresponde al Registro la recepción y recogida de los datos personales contenidos en las solicitudes de legalización y en los propios libros sociales remitidos electrónicamente, así como su registro, consulta y utilización en el ejercicio de las funciones de calificación y comprobación del cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos, incluido el principio de tracto sucesivo.

Asimismo, el Registro es el órgano encargado de practicar la legalización electrónica mediante la aplicación del sello o firma electrónica correspondiente, generando las evidencias digitales necesarias para garantizar la autenticidad e integridad de los libros legalizados y produciendo la huella digital que se conserva a efectos de acreditación y prueba.

Igualmente, a consecuencia del análisis que ahora se realiza y de acuerdo con la normativa de protección de datos, **corresponderá al Registro de Sociedades Cooperativas la gestión del acceso a los datos tratados**,

limitándolo al personal autorizado y garantizando el deber de secreto respecto del contenido de los libros, mediante la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para preservar la confidencialidad y seguridad de la información.

Por otra parte, el Registro ejerce funciones de custodia temporal de los ficheros electrónicos presentados con la única finalidad de llevar a cabo la legalización, procediendo a su supresión una vez finalizado el procedimiento, sin perjuicio del mantenimiento de la huella digital mínima imprescindible para garantizar la integridad de los libros. Finalmente, corresponde al Registro velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales en todas las fases del procedimiento, asegurando que los tratamientos se ajusten a los principios de licitud, minimización, limitación de la finalidad y del plazo de conservación, y garantizando, en el ámbito de sus competencias, los derechos de las personas afectadas.

V

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. En concreto, de acuerdo con el **artículo 6** –“Licitud del tratamiento”-, del **RGPD**, entre otros, dicho tratamiento es lícito y legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

***c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;** (La negrita es nuestra)*

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

***e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;** (La negrita es nuestra)*

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos

perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Conforme al articulado de la norma que se informa, las competencias se ejercerán por el Registro de Sociedades Cooperativas en virtud de las competencias que tiene conferidas por la ley. Dicho Registro se encuadra en el marco de la **gestión pública**, ejerciendo sus competencias de acuerdo con lo establecido en una norma con rango de ley formal, y respondiendo así a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGGDD.

De tal modo, las competencias en materia de registro, custodia y legalización de la “*Documentación social*” de las sociedades cooperativas, se ejerce a través del Registro de Sociedades Cooperativas, conforme establece el **artículo 60 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas** (norma habilitante con rango de ley formal). Así, de acuerdo con dicho precepto:

“Artículo 60. Documentación social.

1. Las cooperativas llevarán, en orden y al día, los siguientes libros:

- a) Libro registro de socios.*
- b) Libro registro de aportaciones al capital social.*
- c) Libros de actas de la Asamblea General, del Consejo Rector, de los liquidadores y, en su caso, del Comité de Recursos y de las juntas preparatorias.*
- d) Libro de inventarios y cuentas anuales y Libro diario.*
- e) Cualesquiera otros que vengan exigidos por disposiciones legales.*

2. Todos los libros sociales y contables serán diligenciados y legalizados, con carácter previo a su utilización, por el Registro de Sociedades Cooperativas. (La negrita es nuestra)

*3. También son válidos **los asientos y las anotaciones** realizados por procedimientos informáticos o por otros procedimientos adecuados, que posteriormente serán encuadernados correlativamente para formar los libros obligatorios, los cuales serán legalizados por el **Registro de Sociedades Cooperativas** en el plazo de cuatro meses desde la fecha de cierre del ejercicio. (La negrita es nuestra)*

4. Los libros y demás documentos de la cooperativa estarán bajo la custodia, vigilancia y responsabilidad del Consejo Rector, que deberá conservarlos, al menos, durante los seis años siguientes a la transcripción de la última acta o asiento o a la extinción de los derechos u obligaciones que contengan, respectivamente.”

Las citadas previsiones normativas, establecidas en una norma con rango de ley formal, responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la

LOPDGDD, cuando dispone que:

*“**Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.***

*1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (La negrita es nuestra)*

*2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley**.” (La negrita es nuestra)*

En consecuencia, **la base de legitimación de los tratamientos derivados de la orden que se analiza se encuentra claramente incardinada en las previsiones de las letras c) y e) del artículo 6.1 del RGPD, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la letra f) en cuanto a las “personas de contacto” —en el sentido del artículo 19 de la LOPDGDD—.**

VI

Tal y como se expuso *ut supra*, el artículo 6 de la Orden, relativo a la seguridad e integridad de los archivos sometidos a legalización, se refiere especialmente al cumplimiento de lo dispuesto en materia de protección de datos. Además, en dicho precepto se impone que en la llevanza del Registro de Sociedades Cooperativas se respete también el deber de secreto respecto del contenido de los libros, estableciendo medidas de seguridad y cifrado de los ficheros electrónicos. Asimismo, se regula un régimen de conservación limitada de los archivos, previendo su borrado una vez finalizado el procedimiento, sin perjuicio del mantenimiento de la huella digital generada en la legalización.

Esta previsión resulta especialmente adecuada desde la óptica del principio de minimización y limitación del plazo de conservación de los datos, al tratarse de archivos temporales cuya finalidad exclusiva es la legalización de los libros. Al mismo tiempo, el mantenimiento de la huella digital garantiza la integridad de los libros a efectos probatorios, en coherencia con lo

dispuesto en el artículo 327 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

A su vez, dado que las actuaciones contempladas en el proyecto de Orden —y especialmente la identificación de los sujetos afectados—, **implicarán** necesariamente tratamientos de los datos de carácter personal, sus previsiones deben relacionarse con los principios de protección de datos recogidos en el **artículo 5** del Reglamento General de Protección de Datos. A los efectos que aquí interesan, el mencionado artículo 5, en su apartado 1, se refiere a los principios de limitación de la finalidad, minimización y exactitud, limitación del plazo de conservación, e integridad y confidencialidad:

“5.1 Los datos personales serán:
(...)

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).”

En este sentido, según se ha expuesto, el artículo 6 de la Orden se limita a establecer, en términos generales, la obligación del Registro de Sociedades Cooperativas de velar por el cumplimiento del deber de secreto y de implantar medidas de seguridad y cifrado respecto de los ficheros electrónicos remitidos para la legalización de los libros, así como a regular un régimen de conservación limitada de dichos archivos, previendo su borrado una vez finalizado el procedimiento, con mantenimiento de la huella digital a efectos de garantizar la integridad de los libros.

No obstante, dichas previsiones, aun siendo relevantes desde la perspectiva de la seguridad e integridad de la información, resultan insuficientes desde el punto de vista de la normativa de protección de datos personales, en la medida en que no contienen una referencia expresa y sistemática al régimen jurídico aplicable al tratamiento de los datos personales que puedan constar en los libros sometidos a legalización.

Por ello, se considera necesario incorporar un precepto específico o, en su caso, una disposición adicional en la que se establezca de forma expresa que el tratamiento de los datos personales que se derive de la aplicación de la Orden se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en la restante normativa vigente en materia de protección de datos personales, con una cláusula que podría adoptar la siguiente redacción u otra similar:

“La totalidad de las actuaciones reguladas en esta Orden se llevará a cabo con el debido cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el resto de normativa aplicable a la materia.

Asimismo, los tratamientos de datos personales efectuados por el responsable al amparo de esta Orden se ajustarán a los principios relativos al tratamiento establecidos en el artículo 5 del RGPD, en particular a los de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad y confidencialidad. De igual modo, el responsable del tratamiento de datos adoptará las medidas técnicas y organizativas apropiadas previstas en el artículo 32 del RGPD para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental.”